



## Presupuesto base cero

El Gobierno federal se metió en un problema cuando de la mano de sus aliados en el Congreso decidió aumentar el gasto público a pesar de que el precio del petróleo llevaba una trayectoria descendente desde mediados de 2014. Ante un panorama incierto, los técnicos financieros de SHCP contrataron coberturas para contener el riesgo de precios más bajos. Esa maniobra sirvió para evitar que el déficit fiscal de 2015 se disparara. Pero los plazos de las coberturas son cortos y no resolverán el problema de 2016.

Muchos analistas (me incluyo) pensaban que los precios del petróleo se recuperarían cuando los inventarios existentes se abatieran y/o los saudíes redujeran su producción para provocar que repuntaran los precios. Esa también parece haber sido la expectativa de los técnicos de SHCP, pero con una diferencia importante: Si mi pronóstico fallaba, no pasaría nada; mientras que si ellos se equivocaban, las consecuencias podían ser graves.

Últimamente, SHCP parece haber concluido que los precios de petróleo seguirán bajos durante varios años y esto motivó que la Secretaría propusiera instrumentar medidas para reducir el gasto público. Tales medidas hubieran convenido en cualquier contexto, pero en el actual, son indispensables. La propuesta de preparar un presupuesto base cero llegó un poco tarde; pero mejor tarde que nunca.

El presupuesto base cero es un método que sirve para identificar oportunidades de recorte de gasto. El proceso parte de la premisa de que cada peso de gasto a ejercer debe ser cuestionado para asegurar que se cumplen 2 condiciones: primero, los beneficios del gasto son significativos y justifican la inversión de recursos; segundo, la forma como se aplicarán los recursos es óptima. El ejercicio en cuestión pone todo a prueba: desde la conveniencia de seguir gastando hasta si no convendrá hallar mejores maneras de hacer la derrama de recursos.

Ejercicios como este son valiosos cuando el gasto ha crecido inercialmente durante muchos años, sin que se haga un cuestionamiento al respecto. En el Gobierno federal (y me imagino que en los gobiernos estatales y locales) hay muchos casos donde se gastan montos enormes sin que se cuestione seriamente si las cosas deben cambiar.

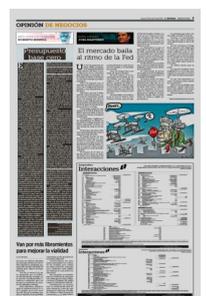
Un ejemplo sirve para ilustrar este tipo de situación: en mi breve periodo como servidor público tuve a mi cargo a decenas de personas que estaban empleadas para cumplir funciones que el Gobierno federal había dejado de realizar. En el caso en cuestión, un giro de políticas públicas causó que se suspendiera la función de planeación agropecuaria, pero ese cambio nunca se vio reflejado en la estructura orgánica de la Secretaría. Así, estas perso-

nas seguían empleadas para realizar una actividad que ya no se realizaba, pero que seguía costando al erario.

Como este caso ha de haber muchos más. El problema no es que nadie se haya dado cuenta de esta situación (los Oficiales Mayores de las Secretarías tienen la obligación legal —y práctica— de estar al tanto de este tipo de circunstancias). No, en el caso descrito la inercia del gasto se debía a compromisos políticos contraídos con el sindicato de burócratas que no se podían cambiar.

Algo similar sucede en el caso de los programas de apoyo del Gobierno federal, donde la naturaleza corporativista del régimen priista motivó que se establecieran cientos de grupos de interés cuya principal razón de ser era la extracción de rentas del Gobierno federal. Organizaciones como la CNC, **Canacimtra** y docenas de otros organismos intermedios explotan con maestría su relación con el Gobierno federal, obteniendo apoyos de varias instancias de gobierno que compiten por atenderlos.

El PEF canaliza miles de millones de pesos a través de programas de subsidio que van a dar a una proporción relativamente pequeña de beneficiarios. Como hasta la fecha no hay una base de datos centralizada que permita identificar qué personas y organizaciones reciben estos recursos públicos, es probable que unos cuantos estén recibien-



Fecha 30.04.2015	Sección Negocios	Página 7
---------------------	---------------------	-------------

do apoyos duplicados de diversas fuentes. Esta situación no cambiará si no se hace una revisión exhaustiva de estos programas para determinar cuáles se deben mantener y qué reglas se requieren para optimizar la entrega de recursos.

Ajustar el gasto público a la baja es una tarea inherentemente compleja y políticamente delicada. Los que se benefician de la situación actual seguramente harán todo lo posible para evitar que haya cambios. Para colmo, el tamaño y la diversidad del gasto complicarán el desarrollo de un presupuesto base cero. Pero esto no significa que no se deba hacer; por el contrario. Esta es una situación en la cual las ONGs que pretenden mejorar el desempeño del Gobierno federal deben apoyarlo. Espero que así sea.

Roberto Newell G.  
es Economista  
y Vicepresidente del Instituto  
Mexicano para la  
Competitividad, A.C.

Las opiniones expresadas en  
esta columna son personales.